

Análisis de investigadores Sebastián Izquierdo y Gabriel Ugarte

CEP y la nueva medición de la pobreza: “El desafío que enfrentamos cambia radicalmente”

JOAQUÍN AGUILERA R.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) sigue de cerca el debate sobre la evolución de la pobreza en Chile, y, de hecho, dos integrantes de la Comisión Asesora Presidencial que revisó su medición oficial han estado ligados a la entidad.

En el organismo, un análisis de los investigadores Sebastián Izquierdo y Gabriel Ugarte llama a no subestimar las conclusiones de este grupo de expertos, donde se revela que con estándares más exigentes, la pobreza sería más alta de la que se ha informado hasta ahora (ver nota principal). “Si la tasa de pobreza en Chile no es 6,5% sino 22,3%, el desafío que enfrentamos cambia radicalmente (...). Este nuevo diagnóstico —fruto de una mejor medición, no de un empeoramiento de la realidad— obliga a replantear prioridades, políticas y capacidades del Estado: el país

SEPTIEMBRE
 De aquí a septiembre se analizará qué medidas se incorporan a la medición de la Casen.

En la entidad afirman que el criterio que sugiere la Comisión Asesora obliga a “replantear prioridades”, darle más urgencia al crecimiento económico y volver a priorizar la focalización.

debe decidir cómo responder frente a una cifra que más que triplica la anterior”, afirman.

En este sentido, el análisis de los especialistas sostiene que parte importante de la respuesta pasa por el crecimiento económico, cuyo desarrollo reciente sugiere un escenario más desafiante que en el pasado. “Entre 1990 y 2017, el 91,9% de la disminución en la tasa de pobreza provino del crecimiento económico (...). Lamentablemente, hoy enfrentamos un escenario menos auspicioso. El crecimiento actual apenas bordea un par de puntos porcentuales y las proyecciones son igual de mediocres. En otras palabras, se ha debilitado el motor principal que permitió reducir la pobreza en el pasado”, dicen.

También afirman que la respuesta a este fenómeno debe pasar necesariamente por un foco específico en los grupos vulnerables: “Es momento de revisar la arquitectura de nuestras políticas sociales. Con décadas de políticas universalistas, es hora de volver a priorizar a quienes más lo necesitan. Aunque a nivel general se observa que el gasto social se concentra en los quintiles socioeconómicos más bajos, la proporción destinada a los más vulnerables ha disminuido gradualmente”.

Avances y desafíos

En cuanto a las sugerencias específicas que planteó la comisión, ambos expertos reconocen que es un avance significativo, aunque hay aspectos debatibles. Por ejemplo, aunque destacan la eliminación del alquiler impu-

tado como medida para ponderar la situación socioeconómica de quienes son propietarios de una vivienda, creen que la idea de establecer líneas de pobreza diferenciadas ofrecen solo una solución parcial. “Sería deseable reconocer su carácter transitorio e impulsar el desarrollo de un instrumento más robusto que permita abordar esta brecha en el futuro”, opinan.

Más críticos son respecto de las propuestas para actualizar la pobreza multidimensional, aquella que considera otros parámetros distintos del ingreso mensual. En materia de educación, dicen, “lo más atractivo es la incorporación de un indicador de resultados”, en alusión a que un hogar será considerado “carente” si al menos uno de sus integrantes asiste a un colegio donde más del 50% de los alumnos obtienen resultados insufi-



Sebastián Izquierdo, investigador CEP.



Gabriel Ugarte, investigador CEP.

cientes en el SIMCE.

Caso opuesto ocurre en salud, reclaman, porque “no se incorpora ningún criterio que refleje la oportunidad de atención, pese a que las listas de espera son una de las principales falencias del sistema”. También plantean que la inseguridad alimentaria puede estar más vinculada a la pobreza por ingresos.

En la dimensión de trabajo, donde el indicador se amplía para ponderar también a las personas subempleadas en términos de horas laborales, señalan que “una mejora adicional podría ser considerar también el subempleo por calificación, aludiendo a quienes ocupan puestos por debajo de su nivel de formación”. Advierten que es discutible el criterio de considerar como hogar carente a uno donde al menos un integrante está dedicado a labores de cuidado, “ya

que las causas detrás de esa situación pueden ser estructurales o elecciones personales”.

En materia de vivienda, también plantean que el indicador propuesto puede reflejar de mejor manera la verdadera vulnerabilidad de los hogares. “No se ajusta por nivel de ingreso, lo que podría llevar a clasificar como carentes a hogares que no experimentan una verdadera pérdida de bienestar”, ejemplifican.

En la última dimensión, de redes y cohesión social, remarcan que “la comisión propone aumentar su ponderación, aunque no se explicita si se resolvieron las limitaciones técnicas que justificaron su menor peso en el índice actual”. Eso sí, valoran positivamente el nuevo indicador de conectividad digital, “relevante en un contexto donde el acceso a internet se ha vuelto esencial para el ejercicio de derechos y oportunidades”.